

## PERÚ POST 11 DE SETIEMBRE: ¿DE QUÉ MODO NOS AFECTA LA NUEVA AGENDA ANTITERRORISTA NORTEAMERICANA?

VILMA C. BALMACEDA VARGAS  
PROFESORA DE DERECHOS HUMANOS DE  
LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

Treinta mil muertos y más de seis mil desaparecidos. Estas cifras son el resultado de la sanguinaria ideología de los grupos armados y la inadecuada política antisubversiva que se aplicó en nuestro país en las décadas ochenta y noventa. Si bien el terrorismo en el Perú nunca logró el desequilibrio estratégico del aparato estatal, sí puso en evidencia las incapacidades e inoperancias de nuestro sistema para mantener la seguridad de los ciudadanos y sancionar a los responsables. Detrás de cada uno de estos números no sólo se ha ocultado el dolor y la miseria de aquellos a quienes golpea directamente esta forma de violencia extrema, estas cifras también significan la deuda pendiente que tiene nuestra sociedad de sincerarse con su pasado, de enfrentar las causas estructurales que permitieron tal barbarie, y de esforzarse por restituir y reparar, en la medida de lo posible, los derechos de las víctimas y sus familiares, proceso que constituye requisito indispensable para intentar alcanzar en algún momento futuro la reconciliación nacional.

Mientras con gran dificultad, la sociedad peruana, de manera dispareja y en ciertos aspectos, inconsistente, está tratando de llevar adelante un proceso de búsqueda de la verdad y de lucha contra la impunidad, ¿cuál es el con-

texto internacional en que enfrenta estos desafíos?

Los atroces acontecimientos del 11 de setiembre del 2001 han producido un cambio sustantivo en la política de Washington. Si bien este cambio, como varios analistas ya han destacado, no significa necesariamente que los problemas hayan cambiado, lo que sí ha cambiado es la óptica con que el gobierno norteamericano ve al resto del mundo. Sin duda, las consecuencias de este cambio son trascendentales.

No obstante el decidido apoyo que los países latinoamericanos mostraron al gobierno de Estados Unidos tras los ataques a las Torres Gemelas y al Pentágono, la principal constatación que se puede hacer como producto de este cambio de óptica es que hay una enorme distracción del gobierno norteamericano en lo que respecta a sus relaciones con sus "aliados" latinoamericanos. Ya que el escenario de la guerra está, al menos por ahora, en otra parte del mundo, es previsible que Estados Unidos destine aún menos recursos y atención a nuestra región.

La única excepción de esto es por supuesto Colombia. Y al involucrarse en Colombia, como se apreció en la re-

ciente visita de Richard Haas, Director de Política y Planeamiento del Departamento de Estado a Brasilia, la política norteamericana ha comenzado ya a presionar por conseguir el apoyo de los países vecinos en un enfrentamiento militar contra "los terroristas" y "los narcotraficantes", entre quienes ya no hace la más mínima distinción. Al respecto, es público que Ecuador ha creado ya dos divisiones para hacer frente a las FARC en el norte de su territorio. Sin duda, nosotros necesitamos fortalecer los puestos militares en nuestra larga frontera con Colombia, a fin de evitar la infiltración, que según algunos advierten, estaría en proceso. Pero una cosa es reforzar la protección de nuestras fronteras y otra substancialmente distinta es integrar la fuerza multinacional pretendida por Estados Unidos, respecto de la cual, afortunadamente, se ha pronunciado el Ministro Loret de Mola indicando la negativa del gobierno peruano a participar en un eventual proyecto de esta naturaleza.

El nuevo esquema que pareciera estarse consolidando en la administración Bush, trae como consecuencia lógica que ahora, con el objeto de obtener la atención del poder hegemónico, los gobernantes latinoamericanos se esfuerzen por presentar sus prioridades y necesi-

dades crecientemente en función de la guerra contra el terrorismo.

Por supuesto, una buena noticia para el Perú sería que este cambio en el contexto de sus relaciones con los Estados Unidos impulsara a nuestro gobierno a por fin enfrentar decididamente las raíces de marginación y falta de equidad que, combinadas con medidas de inteligencia y seguridad interna en un Estado de Derecho, permitan combatir de manera integral los rezagos del terrorismo. Lamentablemente, basta la simple observación de la forma en que Bush está llevando adelante su "guerra contra el terrorismo" para darnos cuenta que no existe intención de encarar las raíces del problema y por ello, tampoco habrá incentivos reales para que nosotros lo hagamos. Los bombardeos en Afganistán, las violaciones a libertades civiles de cientos de detenidos después del 11 de se-

tiembre y las nuevas alianzas con gobernantes de sombríos récords en materia democrática y de derechos humanos, son evidencia de cómo el actual gobierno norteamericano concibe su nueva misión en el mundo.

Esta poderosa influencia sobre un régimen político tan frágil como el peruano, hace patente el riesgo de que los temas pendientes relacionados con la subversión, el narcotráfico y la pacificación nacional vuelvan a ser vistos desde una perspectiva predominantemente militar. En consecuencia, el dogmatismo y maniqueísmo que marcan hoy la dirección de la política norteamericana tienen el potencial de afectar las relaciones civiles-militares—un tema de por sí ya bastante complicado en el Perú—inclinando la balanza hacia una mayor influencia militar en el gobierno de Toledo. Esto sin duda, sería terriblemente

negativo para nuestra incipiente democracia y para la agenda pendiente en materia de reforma de la legislación antiterrorista, la vigencia de los derechos humanos y el intento de lograr una reconciliación nacional, temas que podrían correr el riesgo de ser nuevamente reducidos al ámbito del discurso de una minoría "sediciosa".

Esperar una política más sofisticada de Washington que responda a los verdaderos intereses económicos, sociales y políticos del Perú parece ser una ilusión lejana. Es claro que no habrá mayores incentivos desde Washington para proseguir con el proceso de consolidación de un gobierno civil, democrático y que promueve la vigencia de los derechos humanos. De allí la trascendencia de que este proceso sea impulsado por la actitud vigilante y constructiva de los distintos sectores de la sociedad civil. Valga la advertencia.